



Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 61/2026 cau TAD.

En Madrid, a 6 de marzo de 2026, se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para para conocer y resolver la solicitud de suspensión cautelar formulada por D. XXX, actuando en su propio nombre y representación, contra la resolución dictada por el Comité Nacional de Apelación de la Real Federación Española de Balonmano, de XXX por la que se confirma la resolución del Comité Nacional de Competición, de fecha XXX

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha XXX tuvo lugar la disputa del encuentro entre los equipos XXX Y XXX, correspondiente a la jornada 18 de la División de Honor Masculina de la Real Federación Española de Balonmano.

En el anexo del acta arbitral correspondiente a dicho encuentro se hace constar lo siguiente:

“El jugador nº XXX del equipo “B” D. XXX, ha sido descalificado en el min XXX de partido por golpear con el codo en la cabeza de un contrario después de caer encima de este, tras una acción de juego”.

SEGUNDO. Tras la incoación del oportuno procedimiento, con fecha 25 de febrero de 2026, el Comité Nacional de Competición, dictó resolución sancionadora, cuya parte dispositiva acuerda:

“Sancionar al JUGADORA XXX del equipo XXX, con SUSPENSIÓN DE 3 ENCUENTRO/S OFICIAL/ES, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.a del Rgto. de Régimen Disciplinario, por agredir a un jugador del equipo contrario golpeandole con el codo en la cabeza sin provocar resultado lesivo”

Recurrida en apelación la citada resolución, con fecha 27 de febrero de 2026, el Comité Nacional de Apelación acordó desestimar el recurso, confirmando íntegramente el acuerdo del Comité Nacional de Competición.



TERCERO. Frente a esta última resolución se alza el recurrente, presentando en tiempo y forma recurso ante este Tribunal Administrativo del Deporte. Tras exponer cuanto conviene a su derecho, mediante OTROSÍ realiza petición de medida de suspensión cautelar con el siguiente contenido:

“Al amparo del artículo 117 de la Ley 39/2015, se solicita la suspensión cautelar inmediata de la sanción impuesta, por concurrir:

Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), al existir prueba objetiva que cuestiona la calificación jurídica realizada.

Perjuicio irreparable, al tratarse de competición oficial en curso, donde el cumplimiento anticipado vaciaría de contenido el recurso.

Pérdida de finalidad legítima del procedimiento, pues aun cuando el recurso fuera estimado, el daño competitivo ya sería irreversible.

La ejecución inmediata supondría una sanción anticipada antes de que este Tribunal pueda pronunciarse sobre la correcta aplicación del artículo 19.a).

Por todo ello, se interesa la suspensión cautelar hasta resolución definitiva.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer este recurso con arreglo a lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en concordancia con lo previsto en el artículo 84.1 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en los artículos 6.2 c) y f), y 52.2 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, así como en el artículo 1.a) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte.

SEGUNDO. El recurrente está legitimado activamente para plantear este recurso, por ser titular de derechos e intereses legítimos afectados por ella, en los términos exigidos por el artículo 33.4 del Real Decreto 1591/1992.

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, a instancia de parte, las medidas



cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la resolución que, en su día, se adopte.

CUARTO. Para resolver acerca de la medida cautelar solicitada es necesario partir de dos presupuestos. El primero de ellos se sustancia en el reconocimiento de que la tutela cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como señala el Tribunal Supremo en su Auto de 12 de julio de 2000, la adopción de medidas cautelares durante la sustanciación del proceso o recurso contencioso-administrativo, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE. En este precepto tiene su engarce y dimensión constitucional la llamada justicia cautelar, porque la potestad jurisdiccional no se agota en la declaración del derecho, sino que se consume en la consecución del derecho declarado, lo que presupone la facultad de adoptar las medidas o garantías precisas a fin de preservar la eficacia de lo resuelto.

El segundo de estos presupuestos de lo que debemos partir, es que la concesión o denegación de la medida cautelar exige una ponderación suficiente de los intereses en conflicto (STS de 7 de junio de 2005). Es doctrina jurisprudencial consolidada que esa ponderación de intereses debe efectuarse a la vista de los perjuicios causados por la ejecutividad del acto, perjuicios estos que han de ser acreditados y de difícil o imposible reparación. Cierto es que ese examen tiene carácter preliminar y no puede en modo alguno prejuzgar el resultado del recurso, pero sí ha de ser suficiente para fundar una resolución razonable.

A ello cabe añadir que para la concesión de una medida cautelar es preciso justificar mínimamente la concurrencia de la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*). La entidad de la apariencia debe ser ponderada circunstanciadamente, de manera que sólo cuando la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado se vea destruida *prima facie* por aquella apariencia puede entenderse que queda excluido el fundamento de la ejecutividad y, por ende, plenamente justificada la suspensión.

De todo ello se ha hecho eco igualmente la regulación. En concreto, el artículo 117.2 de la Ley 39/2015 establece las circunstancias que deben concurrir para poder suspender la resolución recurrida previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. Tales circunstancias son: (i) que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; (ii) que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la propia Ley 39/2015.

QUINTO. Así las cosas, siguiendo una consolidada línea jurisprudencial, ha de decirse que el *periculum in mora* constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar.



El recurrente expone que el cumplimiento de la sanción impuesta le causaría un impacto irreparable “*al tratarse de competición oficial en curso, donde el cumplimiento anticipado vaciaría de contenido el recurso.*”

El llamado *periculum in mora* concurre cuando la inmediata ejecución del acto impugnado haría perder su finalidad y sentido al recurso, por consolidar una situación fáctica irreparable o por ocasionar perjuicios de muy difícil enmienda. Este requisito ha de ser invocado y probado por la parte recurrente, no bastando meras alegaciones o simples indicios, sino que es necesario una prueba cumplida de los daños y perjuicios invocados.

También la jurisprudencia viene matizando la concurrencia de este requisito, en el sentido de que esa pérdida de la finalidad legítima del recurso tiene lugar, no sólo en presencia de eventuales perjuicios irreparables, sino también, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 15 de septiembre de 2003 (RJ 2003\6474, recurso de casación núm. 12/2000) que, “*con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que de modo inmediato puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.*”

Además, en el ámbito de la competición deportiva, el *periculum in mora* debe apreciarse conforme al principio *pro competitio*; esto exige ponderar los posibles perjuicios irreparables desde la perspectiva del sujeto competidor.

El jugador recurrente alega que la inmediata ejecución de la sanción le causaría como perjuicio la privación de disputar los siguientes encuentros de la competición en curso.

En este punto, conviene recordar, como hemos señalado en otras ocasiones (v.gr. Resoluciones 59/2025 cau, 121/2025 cau, 244/2025 cau, 255/2025, 256/2025 cau, entre otras) en supuestos de hecho similares al aquí tratado, han sido resueltas en numerosas ocasiones por este Tribunal Administrativo del Deporte y, en todas ellas, se ha llegado a la conclusión de que la imposibilidad de recuperar el partido perdido por el integrante del club (entrenador, jugador, etc.) no constituye un elemento que por sí mismo colme el requisito de la concurrencia del *periculum in mora*. Ello es así, según venimos sosteniendo de forma reiterada, porque la presencia del jugador en el siguiente encuentro por disputar no asegura al club ningún resultado, ni ningún tipo de lance concreto en el desarrollo del partido, por lo que cualquier especulación sobre ello, no deja de ser, precisamente, una mera expectativa y no un perjuicio real.

En este sentido, se ha pronunciado el Auto de 12 de diciembre de 2025, dictado en el Procedimiento Ordinario 60/2025, del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 12, cuyo fundamento de derecho segundo indica: “*No procede la suspensión cautelar solicitada por la parte recurrente. En primer lugar, porque, como indica la resolución impugnada, la imposibilidad de recuperar el partido perdido por el jugador no constituye un elemento que por sí mismo colme el*



requisito de la concurrencia del “peligro en la demora”. Ello es así, según viene sosteniendo de forma reiterada el TAD, y también estos Juzgados Centrales, porque el club dispone de otros jugadores a los que alinear, con lo que la competición puede seguir desarrollándose con normalidad. Y aunque pudiera alcanzarse otra solución cuando el solicitante de tutela cautelar acreditase, en el caso concreto, que, debido a circunstancias adicionales a la sanción, tales como la lesión de otros jugadores, el club no cuenta con jugadores suficientes para la disputa del partido. Sin embargo, tal situación no se ha acreditado ni al tiempo de presentar la solicitud de medida cautelar ante el TAD, ni al reproducirla ante este Juzgado.”

En el presente supuesto, el jugador recurrente no ha acreditado que la ejecución de la sanción produzca perjuicios ciertos e irreparables, por lo que no concurre el requisito del *periculum in mora*.

En efecto, en el presente caso, el eventual perjuicio irreparable que se invoca no recae propiamente sobre el jugador sancionado, sino, en su caso, sobre el club al que pertenece.

En efecto, al tratarse de una competición oficial en curso, las consecuencias derivadas del cumplimiento anticipado de la sanción inciden en la planificación deportiva y en la capacidad competitiva del club.

Sin embargo, dicha afectación no puede trasladarse artificialmente a la esfera jurídica del jugador a efectos de justificar la existencia de un perjuicio irreparable, máxime cuando el propio club, que sería el eventual sujeto afectado por tales consecuencias deportivas en el desarrollo de la competición, no ha interpuesto recurso ni ha comparecido en el procedimiento cuestionando la resolución impugnada, lo que evidencia que el perjuicio alegado no reviste la entidad ni la naturaleza que se pretende atribuirle.

SEXTO. Si bien, siguiendo una consolidada línea jurisprudencial ha de decirse que el *periculum in mora* constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar, también es cierto que en modo alguno es el único, «(...) *ya que debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso, según la justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios que deben ser tomados en consideración (...) y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional*» (STS de 24 de marzo de 2017).

Esto nos lleva al examen de la concurrencia de una apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) que pudiera justificar la adopción de la medida cautelar solicitada en los términos expuestos por el recurrente que, como se ha expuesto, alega que concurre “*a la vista de la prueba objetiva que cuestiona la calificación jurídica realizada.*”

Pues bien, debe recordarse aquí que la jurisprudencia del Tribunal Supremo,



«(...) admite el criterio de apariencia de buen derecho, entre otros, en supuestos de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta; de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula; de existencia de una sentencia que anula el acto en una anterior instancia aunque no sea firme; de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz o, de modo muy excepcional, de prosperabilidad ostensible de la demanda. (...) En efecto, nuestra jurisprudencia advierte (...) que “la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito”.

En definitiva, no es la pieza de suspensión el lugar indicado para enjuiciar de manera definitiva la legalidad de la actuación administrativa impugnada. Ahora bien, la doctrina de que se trata permite valorar la existencia del derecho con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, a los meros fines de la tutela cautelar.

Y es que existen supuestos singulares en los que la apariencia de buen derecho, dentro de los límites en que cabe realizar en la pieza de medidas cautelares, se impone con tal intensidad que si con carácter general la pérdida de la finalidad legítima del recurso es el elemento central de la decisión cautelar, debe ponderarse el posible resultado del asunto principal y el desvalor que representa desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva la ejecución del acto administrativo impugnado» (STS de 24 de marzo de 2017, FD.4).

Lo que viene a confirmar el criterio jurisprudencial reiterado de que sólo en «presencia de una “fuerte presunción” o “manifiesta fundamentación” de ilegalidad de la actividad frente a la que se solicita la medida cautelar, se concede ésta analizando sólo el aspecto del “fumus boni iuris”, sin entrar en el examen de un perjuicio grave irreparable» (SSTS de 7 de abril, 10 de junio y 24 de noviembre de 2004; y de 19 de octubre de 2005).

Esta apariencia así descrita, en fin, es la exigida para poder proceder a la apreciación de la concurrencia del requisito del *fumus boni iuris*.

En la presente situación, a la vista de las alegaciones del recurrente, no se justifica, ni tan si quiera de manera exigua o superficial, la apariencia de buen derecho de su pretensión. Nada alega el recurrente sobre este punto, más allá de la concurrencia de apariencia de buen derecho fundada en la prueba aportada.

La apariencia de buen derecho no puede sustentarse en una valoración subjetiva de lances del juego ni en pruebas que, en todo caso, deberán ser examinadas en el procedimiento principal. La pieza cautelar no constituye el cauce adecuado para anticipar el resultado del recurso ni para enjuiciar el fondo del asunto, pues ello supondría vulnerar el derecho al proceso con todas las garantías.

La doctrina consolidada del Tribunal Supremo insiste en que la suspensión cautelar no puede transformarse en un instrumento para prejuzgar la legalidad del



acto impugnado, sino que debe limitarse estrictamente a asegurar la eficacia de la resolución definitiva.

No puede concluirse sino que los vicios alegados por el recurrente no encajan en los supuestos enumerados por el propio Tribunal Supremo, ya porque algunas de las causas alegadas no son constitutivas de nulidad de pleno derecho y otras que sí pudieran ser constitutivas de tal, no son de ostensible prosperabilidad -vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por denegación de prueba, letra b) del artículo 47 de la Ley 39/2015-.

Todo ello, claro está, sin que se prejuzgue el sentido de la resolución que en su momento se dicte, partiendo de que estamos en el ámbito cautelar y, por tanto, está vedado ahora entrar a conocer sobre el fondo del asunto, constituido por las diversas perspectivas subjetivas que defiende el recurrente en su disconformidad frente al acto recurrido y de ahí que no se vayan a resolver dentro de esta pieza de suspensión.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el 30 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva y, por aplicación supletoria, en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y teniendo por atendidas las circunstancias que deben valorarse en este tipo de solicitudes de medidas cautelares, así como el principio *pro competitione*, este Tribunal considera que no procede estimar la solicitud de suspensión cautelar.

SÉPTIMO. Adicionalmente a lo anterior, debe recordarse que la concesión o denegación de una medida cautelar exige realizar una adecuada ponderación de los intereses en juego, el interés general, el interés particular del recurrente y los intereses de tercero. Así, procede efectuar una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, en orden a la concesión o denegación de la medida cautelar impetrada.

El criterio jurisprudencial respecto a su adopción es recogido en los siguientes términos: se concederá la medida cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso; se denegará, en cambio, cuando, aun concurriendo el *periculum in mora*, de la adopción de aquella “*pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada*”.

El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de pérdida de la finalidad legítima del recurso, de manera que solo procederá su valoración en aquellos casos en los que el primero concurra. A sensu contrario, si no se aprecia la concurrencia del *periculum in mora*, no habrá lugar a la adopción de la medida cautelar, cualquiera que sea la valoración de los intereses concurrentes. Así ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: “*al juzgar sobre la procedencia de la medida cautelar se debe ponderar, ante todo, la medida en que el*

interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud según el grado en que el interés público esté en juego”.



En este punto, el Auto de 28 de noviembre de 2025, dictado en el Procedimiento Ordinario 67/2025, del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº10, señala en su fundamento de derecho primero lo siguiente: “[...] *no es posible resolver la solicitud teniendo en cuenta exclusivamente este criterio, puesto que la suspensión de la ejecución de la sanción acordada por los órganos competentes del ámbito deportivo, supone una alteración de la competición que incide en derechos de terceros, en concreto el de los otros equipos participantes en ella y, en especial, el que ha de jugar contra el Betis el próximo partido.*

La incidencia en la competición es clara, porque la suspensión se cumpliría de ser confirmada en otros partidos frente a otros equipos alterando el desarrollo y resultado de aquélla.

Este interés resulta, a mi juicio, más digno de protección que el del jugador por jugar el próximo partido y su club consistente en contar con sus servicios en él, dándose la previsión del artículo 130.2 de la LJCA que ha de conducir a la denegación de la medida.

Por otra parte, proceder a la suspensión de la sanción por esta vía, teniendo en cuenta exclusivamente la pérdida de la finalidad del recurso, llevaría en la práctica a permitir al club elegir el partido en que le interesa que su jugador cumpla la sanción de suspensión con lo que, nuevamente por esta vía, se vendría a interferir en el normal desarrollo de la competición.”

En este punto, considera este Tribunal que la adopción de la medida solicitada comprometería gravemente el interés general, al permitir que un jugador sancionado participe en la competición. Ello frustraría la finalidad legítima del procedimiento disciplinario y debilitaría la confianza en el sistema sancionador. Frente a los intereses particulares del recurrente, prevalece el interés público en la correcta aplicación de las normas y en la preservación de la igualdad y la integridad de la competición, *pro competitione*.

En su virtud, este Tribunal Administrativo del Deporte

ACUERDA

DENEGAR la solicitud de suspensión cautelar formulada por D. XXX, actuando en su propio nombre y representación, contra la resolución dictada por el Comité Nacional de Apelación de la Real Federación Española de Balonmano, de XXX por la que se confirma la resolución del Comité Nacional de Competición, de fecha XXX

La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA